



El gas, el carbón y los combustibles líquidos deben continuar desempeñando un rol estratégico, especialmente en contextos de hidrología crítica. Archivo

Sector energético del país requiere decisiones oportunas y eficientes

La transición energética no debe traducirse en la prohibición de actividades, sino en un impulso hacia el uso eficiente de los recursos.



Alejandro Castañeda Cuervo

EL 2025 se perfila como un año crucial para el sector energético de Colombia, marcado por desafíos significativos en términos de seguridad, sostenibilidad y confianza en el marco regulatorio. En un contexto global donde la transición hacia fuentes más limpias sigue siendo una prioridad, no se puede perder de vista la necesidad de garantizar suministros confiables y accesibles. El sector colombiano enfrenta retos que no solo dependen de la política interna, sino también de las dinámicas internacionales, especialmente con la llegada del nuevo manda-

to de Donald Trump y su renovado enfoque en la seguridad energética, así como el inicio de la discusión nacional sobre la política pública para el próximo período presidencial.

Durante 2024, la generación de energía térmica demostró su papel fundamental ante situaciones críticas como el reciente fenómeno de 'El Niño', catalogado como uno de los más intensos en los últimos años. En este contexto, la generación térmica cubrió aproximadamente el 58% de la demanda eléctrica nacional, ratificando su importancia no solo para abastecer el mercado interno, sino también para apoyar el suministro de electricidad a nuestro vecino Ecuador. A pesar de este balance positivo, el panorama del sector eléctrico en Colombia si-

gue siendo incierto debido a las recientes intervenciones del Gobierno en las tarifas de energía, que han generado desconfianza en las inversiones necesarias para fortalecer la infraestructura energética. Estas decisiones, ambientadas con una permanente narrativa negativa que desmerita el sistema eléctrico colombiano -el cual ha garantizado el abastecimiento continuo de la demanda nacional durante los últimos 30 años-, han llevado a que empresas líderes como Brookfield y EDP Renewables expresen su preocupación por la falta de confianza en el entorno regulatorio y el impacto negativo en la viabilidad y desarrollo de nuevos proyectos de energía.

A esta incertidumbre se suma la crisis financiera que enfrentan varios actores cla-



Incumplimiento del Gobierno, en pago de subsidio a energía y gas natural, genera deuda de más de \$3,6 billones”.

ve del sector, agravada por el grave incumplimiento del Gobierno en los pagos de subsidios a la energía y el gas natural, lo que ya ha generado una deuda superior a los 3,6 billones de pesos, equivalentes casi a la totalidad del presupuesto para este año de la ciudad de Cartagena. Esta si-

tuación pone en riesgo no solo la sostenibilidad del servicio, sino también la capacidad del país para garantizar un suministro confiable de energía en los próximos años. En 2025, la necesidad de asegurar la oferta energética, especialmente a partir del gas natural, será aún más urgente, considerando que no se han incentivado nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, y que la falta de inversiones podría generar un riesgo de desabastecimiento de este combustible a partir de 2027. A esto se suman los retrasos y eventuales cancelaciones de proyectos *offshore* clave como *Sirius* y *Komodo-1*, lo que aumenta la incertidumbre sobre la disponibilidad futura de gas nacional para el país. Y lo que antes era visto con recelo, el gas natural importado, es lo que hoy está salvando el abastecimiento para la generación térmica como para la atención domiciliar e industrial.

Por otro lado, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se espera un cambio en la política energética internacional y, en particular, un mayor protagonismo de los combustibles fósiles en la matriz energética global bajo la consigna del *“drill, baby, drill”*. En este sentido, la transición energética en Colombia no debe interpretarse como la eliminación de fuentes tradicionales de energía, sino como un pro-

ceso complementario en el que el gas, el carbón y los combustibles líquidos continúan desempeñando un rol estratégico, especialmente en contextos de hidrología crítica. La generación térmica ha demostrado ser un respaldo esencial para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, y su importancia no debe subestimarse. Otro apagón como el de 1992 sería catastrófico.

Así las cosas, Colombia necesita avanzar hacia un modelo de transición energética que no solo sea viable, sino que también garantice la seguridad del suministro y la estabilidad de las tarifas para los usuarios finales. Para ello, es imprescindible un marco regulatorio claro y predecible que incentive las inversiones tanto públicas como privadas en infraestructura energética. El fortalecimiento institucional, a través de la designación de expertos en entidades como la Creg y la reactivación de subastas del Cargo por Confiabilidad, es clave para restaurar la confianza en el sector y mejorar su sostenibilidad financiera. En este proceso, el Congreso de la República jugará un papel fundamental en 2025, ya que deberá liderar las discusiones sobre iniciativas legislativas orientadas a preservar la pluralidad, fortalecer la gobernanza y atraer las inversiones necesarias para el desarrollo económico y social del país. Treinta y tres años de responsabilidad requiere del acompañamiento y apoyo de todos los actores sociales del país.

En definitiva, este año debe marcar el inicio de un proceso serio de reflexión sobre la política energética de Colombia, sentando las bases para un modelo que no solo sea sostenible ambientalmente, sino también en términos de seguridad energética, estabilidad jurídica y desarrollo económico. La transición energética no debe traducirse en la prohibición de actividades, sino en un impulso hacia la innovación tecnológica y el uso eficiente de los recursos naturales y energéticos del país. Para que Colombia avance hacia un futuro energético más seguro y sostenible, es fundamental garantizar la estabilidad institucional, la confianza de los inversionistas y una red eléctrica flexible y preparada para los desafíos de la transición energética global.

Presidente Ejecutivo de Andeg.